

En Santiago a 05 de noviembre de dos mil veintiuno

VISTOS,

Que, a folio 1 comparece ANA VERÓNICA BRICEÑO OSSANDON, cédula de identidad N°9.872.202-5, domiciliado en Morandé N°835, oficina N°1410, comuna de Santiago, región Metropolitana, quien deduce demanda por despido injustificado, indebido o improcedente y cobro de prestaciones e indemnizaciones en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A., rol único tributario N°98.000.000-1, representada legalmente por JAIME MUNITA VALDIVIESO, se ignora cédula de identidad, ambos domiciliados en Av. Apoquindo N°4820, de la comuna de Las Condes, región metropolitana.

Funda su demanda en que inició la relación laboral con la demandada el 01 de diciembre de 2006, para la función de agente profesional de ventas, la duración de sus labores era indefinida. La remuneración para estos efectos era de \$707.837.- (Setecientos siete mil ochocientos treinta y siete pesos).

La actora indica que estaba excluida de la limitación de jornada laboral, pese a que en la práctica debía presentarse todas las mañanas a las 08:30 horas en la oficina y durante la tarde debía presentarse para hacer el ingreso de las ventas realizadas durante el día alrededor de las 17:30 horas. Por lo tanto, a pesar de que la jornada en el contrato indicara la exclusión de la limitación de jornada en la práctica la actora tenía la obligación de cumplir horario siendo supervisada continuamente en todas sus actividades, por lo que alega que en realidad estaba en presencia de una jornada ordinaria de trabajo.

La Sra. Briceño indica haber sido despedida mediante carta de aviso de término de contrato el día 17 de febrero de 2021 por la causal necesidades de la empresa. La causal invocada está basada en el impacto al empleo que ha tenido la pandemia COVID-19, por lo que la empresa señala que se vio en la necesidad de replantear y reestructurar los cargos y funciones del personal y así afrontar los resultados negativos que genera la presente contingencia.

La actora considera su despido totalmente injustificado, toda vez que se invocan un cúmulo de frases genéricas que no explican en absoluto la necesidad que tuvo la



demandada de desprenderse de los servicios de la Sra. Briceño, señalando de forma muy general que se debe a una reestructuración, la cual no se detalla y por lo tanto a todas luces parece ser un mero capricho de la empresa.

Afirma que la empresa señaló en la carta de despido que había tenido malos resultados debido a la pandemia, pero de acuerdo con datos entregados por las administradoras para el mercado financiero en el período de abril-junio, sus utilidades subieron en 36.9%. A mayor abundamiento la empresa abre concursos para postular como ejecutivo de ventas en varios portales de empleo. Sostiene que el despido por necesidades de la empresa debe responder a situaciones objetivas y no meros intereses del empleador.

Da cuenta de que las partes suscribieron finiquito con fecha 17 de febrero de 2021, el día 15 de marzo de 2021, recibiendo el pago de indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicio, feriado legal y proporcional, se hicieron descuentos de seguro de cesantía. El documento fue suscrito con expresa reserva de derechos a demandar por despido injustificado, nulidad del despido, descuento de AFC, descuentos por fuga, semana corrida, comisiones pendientes y otras prestaciones.

En consecuencia, la actora solicita se declare el despido injustificado y que se condene a la demandada al pago de recargo legal del 30% sobre indemnización por años de servicio por un monto de \$2.335.862.- (Dos millones trescientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos), devolución del descuento de seguro de cesantía por un monto de \$3.422.220.- (Tres millones cuatrocientos veintidós mil doscientos veinte pesos), intereses, reajustes y costas.

A folio 04 consta notificación de la demanda.

La demandada AFP CAPITAL contestó la demanda reconociendo las funciones desempeñadas por la demandante como agente profesional de ventas, la fecha de suscripción del contrato y finiquito y la remuneración indicada por la actora. Controvierte por otra parte todo lo demás indicado por la demandante.

En relación a la causa del despido el constante proceso de recambios de objetivos de la compañía, que lleva a la necesidad de robustecer las estructuras de la empresa, así como replantear los cargos y funciones del personal, con el objeto de reestructurar uno y otros por



estrictas necesidades objetivas, lo que importa necesariamente la supresión y reestructuración de funciones en lo referente a algunos cargos, lo que generó el despido de la demandante y de otros trabajadores, cabe señalar que la empresa, como todas las empresas se ha visto afectada por las fluctuaciones de la economía producto de la pandemia y han debido realizar estas reestructuraciones, debido a la caída de rentabilidad que ha afectado a los mercados nacionales e internacionales, lo que alcanza al patrimonio de AFP CAPITAL a través del resultado de encaje del 1%, pero que representa más de la mitad del patrimonio de la administradora.

Los resultados de encaje de AFP CAPITAL al término del primer trimestre de 2020 muestran una pérdida cercana a los \$31.930.000.- (Treinta y un millones novecientos treinta mil pesos). De esta manera el despido de la actora debe ser considerado plenamente justificado, pues la causal se ha aplicado correctamente, teniendo que desvincular por la misma causal a muchos otros trabajadores.

Dado lo anterior, se solicita que se rechace la demanda y caso de que se establezca que el despido fue improcedente se declare que el descuento legal correspondiente al seguro de cesantía es procedente.

Habiendo el Tribunal llamado a conciliación, ésta no se produce. El Tribunal propuso como bases de conciliación el 20% del recargo legal y el 50% de saldo del aporte del AFC, ello por la suma de \$3.500.000.- (Tres millones quinientos mil pesos). Finalmente, las partes no lograron llegar a acuerdo.

CONSIDERANDO,

PRIMERO: Que en la audiencia preparatoria se fijaron como hechos pacíficos la fecha de ingreso de la trabajadora el 1 de diciembre del año 2006, su cargo como agente profesional de ventas, la remuneración percibida de \$707.837.- (Setecientos siete mil ochocientos treinta y siete pesos); Que fue despedida el 17 de febrero de 2021, por causal de necesidades de la empresa del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo y cumpliendo las formalidades y que recibido de su finiquito las indemnizaciones y de ella se descontó por concepto de aporte al seguro de desempleo del empleador la suma de \$3.422.220.- (Tres millones cuatrocientos veintidós mil doscientos veinte pesos)



En dicha audiencia, se fijó como único hecho a probar la efectividad de ser ciertos los hechos contenidos en la comunicación de despido.

SEGUNDO: Que, en la audiencia de juicio las partes rindieron la siguiente prueba:

A) Demandada:

I. Documental:

1. Carta de despido de fecha 17 de febrero de 2021.
2. Comprobante de envío por correo certificado.
3. Constancia Despido Inspección del Trabajo.
4. Certificado de Saldo Aporte Empleador al Seguro de Cesantía, de fecha 21 de febrero de 2021.
5. Carta de fecha 15 de abril de 2020 dirigida al presidente de la CMF por el gerente general de la demandada.
6. Print de Pantalla de las correspondencias enviadas a la CMF con fecha 15 de abril de 2020
7. 42 cartas de despido de fechas entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre de 2020.

II. Confesional: Absolvió posiciones la demandante Verónica Briceño Ossandón

III. Testimonial: Declararon los siguientes testigos

1. Carla Bravo Aguilera
2. Victor Olivares Pastén

IV. Oficios: se incorporó respuesta a oficio de la Dirección del Trabajo

B) Demandante:

I. Documental:

1. Carta de aviso de término de contrato de fecha 17 de febrero de 2021.
2. Copia de finiquito de contrato de trabajo suscrito por las partes, con reserva derechos, de fecha 17 de febrero de 2021.

II. Confesional: Absolvió posiciones Christian Bonometi, en calidad de representante legal de la demandada



TERCERO: Que el único hecho controvertido dice relación con la efectividad de los hechos contenidos en la carta de aviso de despido de fecha 17 de febrero de 2021, respecto de la cual se cumplieron las formalidades en cuanto a su notificación. Es necesario hacer presente que el art. 454 N°1 inc. 2 del Código de Trabajo dispone que:

“No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.” (Destacado propio).

Conforme a lo anterior, el contenido de la carta circunscribe la prueba que puede ser recibida por el tribunal para efectos de acreditar la configuración de la causal de despido invocada, y por tanto los hechos no señalados en la carta de aviso de despido no pueden ser agregados de forma posterior por la demandada. Ante tal circunstancia, corresponde analizar la carta de aviso de despido, a fin de delimitar su contenido y determinar si con la prueba rendida ha podido acreditarse su efectividad.

La carta de despido acompañada por ambas partes señala como hechos fundantes de la causal del art. 161 inc. 1 del Código del Trabajo los siguientes:

- (i) Necesidad de robustecer estructuras y replantear cambios y funciones por estrictas necesidades objetivas
- (ii) Supresión de cargos, restructuración de funciones y despidos producto del impacto en el empleo de la pandemia de Covid-19
- (iii) Impacto de las economías a nivel mundial y a los mercados
- (iv) Repercusión negativa en las comisiones por aportes a los fondos de pensiones
- (v) Resultados de la compañía no han sido los esperados según plan de la empresa

La prueba documental rendida da cuenta en sus primeros 4 puntos solo sobre el cumplimiento de formalidades del despido, contenido de la carta y saldo del aporte del empleador aportado al seguro de cesantía. El quinto documento se trata de un hecho esencial informado a la Comisión para el mercado financiero el 15 de abril de 2020, donde



se indica que al cierre del primer trimestre del año 2020 se registraría una pérdida por parte de la AFP Capital de \$9.545 millones de pesos. la explicación del hecho es la caída en la rentabilidad que alcanzó el patrimonio de la administradora a través del resultado del encaje. El penúltimo párrafo señala que “no perdemos de vista que los datos definitivos se presentarán en los estados financieros que se deben enviar a esa Comisión y a la Superintendencia de Pensiones (...)”. El documento N°6 da cuenta de la efectividad de haber realizado esta comunicación a la CMF en la fecha indicada. Este documento en consecuencia solo prueba que, al momento de la emisión del mismo, se registraría una eventual pérdida por el monto señalado, debido a los problemas de rentabilidad. Pero es el mismo documento el que da a conocer que esta información no es definitiva, sino que se trata de la situación de la empresa al momento de la emisión del documento, es decir en abril de 2020. Por lo demás, dentro de los motivos del despido no se contiene la existencia de pérdidas por parte de la compañía, según la enumeración efectuada, sino que se aduce que los resultados de la compañía “no son los esperados según el plan”. Al efecto, no se acompaña un plan o comparativo para determinar cuál era la rentabilidad que debía esperarse de la compañía y por qué los números presentados representarían una amenaza o constituirían a la compañía en la necesidad de despedir trabajadores. Por lo demás, los propios testigos descartaron que existieran pérdidas. La testigo Carla Bravo sostuvo que había utilidades, que, si bien no se comparaban a las que había antes, de todas formas existieron utilidades. Por su parte el absolvente de la parte demandada reconoció haber visto los balances o estados financieros e indicó que el negocio daba resultados positivos, pese a que habían tenido problemas desde el 18 de octubre de 2019 y la imposibilidad de vender. Al efecto el absolvente sostiene que se debió despedir a personas debido a los malos resultados económicos a los que hace referencia el hecho esencial comunicado a la CMF, cuestión que no se menciona en la carta de aviso de despido.

Como se ha descrito, la carta de aviso de despido indica la existencia de necesidades objetivas – que no se detallan- de reestructurar, y la supresión de cargos y términos de contratos de trabajo. Este último punto es el único que ha sido fehacientemente acreditado por medio de las 42 cartas de despido de idéntico tenor acompañadas en el punto 7 de la prueba documental. Sin embargo, tal hecho no es una causa propiamente tal del despido de la demandada, sino que es, al igual que el despido de la actora, una eventual consecuencia



de las supuestas causas que obligaron a la demandada a despedir a la actora y al resto de los trabajadores cuyas cartas se acompañan. En tal circunstancia, no puede justificarse un despido en otros despidos en análogas circunstancias. Por el contrario, este hecho solo acredita la efectividad de que la demandante no fue la única desvinculación en el periodo, asunto que no ha sido discutido.

La carta de despido continúa atribuyendo los problemas por los que atravesaría la compañía a la pandemia, a su impacto en la economía a nivel mundial y los mercados y a la repercusión negativa en las comisiones por aportes a los fondos de pensiones. Sin perjuicio de que la pandemia es un hecho público y notorio, no resulta auto evidente que todas las actividades económicas se vean perjudicadas con el impacto de la pandemia a nivel mundial. Lo anterior, teniendo en cuenta que las Aseguradoras de Fondos de Pensiones recibe una comisión por la administración de los fondos de las cotizaciones que no se ha modificado, por lo que una eventual merma en los ingresos por concepto de comisión (como se señala en la carta de despido) solo se verificaría por la fuga de cotizantes a otras aseguradoras del sistema o por el alza en el desempleo y la consecuente baja en el universo de cotizantes. Ninguna de estas circunstancias se ha mencionado ni menos acreditado.

Distinto sería el escenario si la demandada diera razón de sus dichos, explicando el negocio de la empresa demandada, y como las variaciones en los mercados afectan la rentabilidad tanto de los fondos de los administrados como del patrimonio de la administradora, y en consecuencia como ello implicaría inconvenientes económicos que realmente configuren la necesidad de reestructurar las áreas que indica en la empresa. Sin embargo, nada se ha dicho al respecto, atribuyéndose los problemas únicamente a las repercusiones en las comisiones, lo que además no se demostró por ningún medio.

El resto de la carta de despido señala la causal, los montos por concepto de indemnizaciones e informa del estado de pago de las cotizaciones previsionales. A simple vista, la carta de despido resulta genérica, pues no especifica como las situaciones descritas afectan de forma directa al puesto de trabajo que desempeñaba la actora, ni porque es su cargo el que debe ser suprimido o su contrato terminado. Si bien el requisito del art. 162 del Código del Trabajo se refiere a la indicación de la causal y sus fundamentos fácticos -lo que en la especie se incorporó en la carta-, el cumplimiento de tales formalidades no garantiza en ningún caso que tales hechos consignados por el empleador configuren la causal de



despido que se pretende invocar, sino que solo dan cuenta del cumplimiento de un deber legal de no solo señalar la causal, sino que indicar cuales son los hechos que a juicio del empleador la justificarían. Por ello, exigir al empleador justificar debidamente el despido en cuanto a los requisitos de la causal no implica imponer una carga adicional, sino que ella es inherente al uso de cualquier causal de despido: Que con los hechos relatados efectivamente esta pueda configurarse.

En cuanto al caso específico, la causal utilizada es la del art. 161 inc. 1 del Código del Trabajo. Al respecto, es menester señalar que tal motivo de despido es de carácter objetivo, que se compone de elementos técnicos, objetivos y fácticos, este último relacionado a la necesidad del despido. En cuanto al primer requisito, este se refiere a aspectos técnicos o económicos que afecten a la empresa, y debe tratarse de circunstancias graves o irremediables para el empleador, no transitorias. El requisito o exigencia objetivo por su parte, dice relación con que la causa sea ajena a la voluntad del empleador, y que los hechos o circunstancias alegados hagan procedente la causal. Por su parte en cuanto al último requisito relativo a elementos que den cuenta del necesario despido del trabajador, Irene Rojas (2020) sostiene que se da el debate relativo a la definición de los trabajadores concretos que se verán afectados, ya que esta definición debe ser la consecuencia necesaria e indispensable del supuesto que configura la causa de necesidades de la empresa, “cuestionándose de esta manera la falta de criterios objetivos en la determinación de los trabajadores que son despedidos” (Rojas, Irene (2020). Las necesidades de la empresa como causa de terminación del contrato de trabajo en el sistema jurídico chileno. En Revista de derecho de Coquimbo (en línea), p. 14. Disponible en <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rducn/v27/0718-9753-rducn-27-13.pdf>). En el caso, solo se hace una mención genérica al puesto de trabajo de la demandante, sin explicar cómo los hechos afectan al área específica, a su puesto de trabajo y por qué es ella quien resulto despedida y no las otras personas que también cumplen dicha función.

Finalmente, mediante la prueba testimonial la demandante intentó seguir una teoría del caso fundada en las bajas expectativas de la compañía respecto al trabajo de los vendedores, producto de la dificultad de prestar servicios de forma remota. Tales circunstancias no fueron alegadas en la carta de despido, así como tampoco se señaló el tema detallado por ambos testigos respecto de la disminución de las metas de gestión. Por



tanto, estos antecedentes no pueden ser considerados como hechos fundantes del despido al no encontrarse contenidos en la comunicación de despido.

Conforme a lo razonado, a juicio del tribunal solo se ha acreditado -respecto del contenido de la carta- que la empresa ha efectuado múltiples despidos. Tal circunstancia no justifica la desvinculación de la actora. Los otros hechos mencionados en la carta, aun cuando hubieren sido probados – lo que no ocurrió en la especie-, no logran tampoco configurar la hipótesis de necesidades de la empresa, pues en definitiva no es posible atribuir la necesidad de despedir trabajadores y de efectuar una reestructuración y supresión de puestos de trabajo cuando no existen probadamente resultados adversos. En tales circunstancias, el despido de la trabajadora resulta improcedente.

CUARTO: Que, conforme a lo resuelto, y en virtud de lo establecido en el art. 168 letra a) del Código del Trabajo, se condenará a la demandada al pago del recargo del 30% de la indemnización por años de servicio, por el monto de \$2.335.862.- (Dos millones trescientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos). Lo anterior, según monto de indemnización por años de servicio contenido en finiquito suscrito por las partes con fecha 17 de febrero de 2021.

QUINTO: Que se ha solicitado la devolución del monto descontado en finiquito por concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía. Dicho monto fue fijado como hecho pacífico – además de que consta en finiquito acompañado- en la suma de \$3.422.220.- (Tres millones cuatrocientos veintidós mil doscientos veinte pesos). Al respecto, cabe señalar que el fundamento de este descuento se encuentra en el art. 13 de la ley N°19.732 que dispone que si el contrato de trabajo termina por la causal del art. 161 inc. 1 del Código del Trabajo el empleador tendrá derecho a imputar a la indemnización por años de servicio la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía del trabajador.

A juicio de este sentenciador, la posibilidad de efectuar la imputación del aporte del empleador al seguro de cesantía en la indemnización por años de servicio se encuentra supeditado necesariamente a la procedencia del despido por la causal del art. 161 inc. 1 del Código del Trabajo. Lo anterior, en consideración particularmente a dos circunstancias. La primera es que la declaración de despido improcedente implica inevitablemente que el empleador ha incurrido en una irregularidad de forma (formalidades del despido, mala



redacción de la carta de aviso, por ejemplo) o de fondo den el despido (causal de despido infundada, o imposible de configurar a través de los hechos contenidos en la comunicación del despido). De tal forma, permitir la imputación de dicho monto aun cuando se ha declarado judicialmente que el despido resulta improcedente por los motivos expuestos es equivalente a permitir que el empleador se aproveche de su propio dolo o negligencia, descontando un monto en la indemnización del art. 163 inc. 2 aun cuando no procedía el despido. En segundo lugar, es un requisito del descuento según lo dispuesto en la norma descrita en el párrafo anterior que el despido se hubiera efectuado por la causal indicada, por lo tanto, declarada su improcedencia por el tribunal, deja de existir la causal legal que habilita al empleador para invocar el pretendido descuento.

Conforme a lo anterior, se accederá a la petición de la demandante, pues en autos se ha declarado la improcedencia del despido por la causal del art. 161 inc. 1. En tal circunstancia, se ordenará el pago del monto descontado, esto es \$3.422.220.- (Tres millones cuatrocientos veintidós mil doscientos veinte pesos).

SEXTO: Que, habiendo sido totalmente vencida la parte demandada, se le condenará en costas, regulándose estas en la suma de \$500.000.- (Quinientos mil pesos). lo anterior conforme a lo establecido en el art. 144 del Código de Procedimiento Civil, aplicable expresamente conforme a lo dispuesto en el art. 432 del Código del Trabajo.

SÉPTIMO: Que las sumas ordenadas deberán ser pagadas con los intereses y reajustes señalados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda.

Por tanto, en virtud de lo expuesto, y de lo dispuesto en los artículos 63, 161, 162, 163, 168, 172, 173, 420, 432, 453 y siguientes del Código del Trabajo, art. 13 de la ley N°19.732 y demás normas legales aplicables se declara:

- I- Que **se acoge** en todas sus partes la demanda interpuesta por ANA VERÓNICA BRICEÑO OSSANDON en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.
- II- Que el despido de la demandante fue improcedente.



- III- Que producto de lo anterior, la demandada ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. deberá pagar a la demandante los siguientes montos por los conceptos que se indican:
- a. \$2.335.862.- (Dos millones trescientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos), por concepto de recargo del 30% de la indemnización por años de servicio.
 - b. \$3.422.220.- (Tres millones cuatrocientos veintidós mil doscientos veinte pesos), por concepto de devolución del descuento efectuado del aporte del empleador al seguro de cesantía
- IV- Que las sumas señaladas deberán ser pagadas con los intereses y reajustes legales establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo según corresponda.
- V- Que se condena en costas a la demandada, las que se regulan en \$500.000.- (Quinientos mil pesos).
- VI- Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: O-1828-2021

RUC: 21-4-0327489-2

Resolvió don GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ ÓRDENES, Juez suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago, a cinco de noviembre del año dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la presente sentencia.

